



En la sesión inaugural de la sesión de las Naciones Unidas, sentado, Juan Manuel Elizondo y el frente la izquierda) Andrés Sáenz López.

¡Ahora o nunca... aún es tiempo!

Al finalizar el año 1982 el gobierno, todavía el de López Portillo, vivía en la euforia de los ingresos petroleros. No advirtió que ya, en ese tiempo, la crisis económica había profundizado en los países industrializados y, claro está, en los llamados del tercer mundo.

Los altos ingresos por la venta del petróleo y el auge de la economía hicieron pensar al gobierno que México era un país de excepción, con un crecimiento anual sostenido del nueve por ciento mientras que los países industrializados llegaba apenas, por eso, al cinco por ciento. Todo hacía suponer al gobierno que aquí se vivía en una isla, la isla de la felicidad, sin temor al riesgo por lo que ocurría en el resto del mundo. Se menospreció el hecho de que la quiebra de miles de empresas industriales en Europa y en Estados Unidos y el consiguiente desempleo de más de veinticinco millones de personas iban a afectar, tarde o temprano, los precios internacionales del petróleo y, por tanto, los ingresos mexicanos. El gobierno reaccionó al igual que los países industrializados en crisis, a admitir el carácter estructural de esta fenómeno, atribuyó, y sigue atribuyendo aún ahora, la crisis mexicana a la baja de los precios del petróleo en el mercado internacional, sin darse cuenta de que la baja

I. Conferencias

de esas precios a nivel mundial no está cosa de la crisis
internacional, sino sólo a nivel de los países del pe-
troleo, que es una crisis y que la baja de los precios del pe-
tróleo sólo afectó a los países que dependen de él.
Admitir que la crisis es estructural, que se debe
a una crisis general en todo el sistema capitalista, tal vez
porque ésta no se habla por el desmoronamiento de
la economía de un país determinado, como
en 1929, sino por una crisis que involucra a todos
los países industrializados, como el comercio entre los
países industrializados y de todos ellos con el resto del mundo. Cuando la
crisis mundial se hizo presente en México con la baja de
los precios del petróleo, el gobierno del presidente López
Portillo, en el momento en que se produjo el petróleo

¡Ahora o nunca... aún es tiempo!

Al finalizar el año 1982 el gobierno, todavía el de López Portillo, vivía en la euforia de los ingresos petroleros. No advirtió que ya, en ese tiempo, la crisis económica habíase profundizado en los países industrializados y, claro está, en los llamados del tercer mundo.

Los altos ingresos por la venta del petróleo y el auge de la economía hicieron pensar al gobierno que México era un país de excepción, con un crecimiento anual sostenido del nueve por ciento mientras los países industrializados llegaba apenas, por esos días, al dos por ciento. Todo hacía suponer al gobierno que aquí se vivía en una isla, la isla de la felicidad, sin temor ni riesgo por lo que ocurría en el resto del mundo. Se menospreció el hecho de que la quiebra de miles de empresas industriales en Europa y en Estados Unidos y el consiguiente desempleo de más de veinticinco millones de personas iban a afectar, tarde o temprano, los precios internacionales del petróleo y, por tanto, los ingresos mexicanos. El gobierno reacio, al igual que los países industrializados en crisis, a admitir el carácter estructural de este fenómeno, atribuyó, y sigue atribuyendo aún ahora, la crisis mexicana a la baja de los precios del petróleo en el mercado internacional, sin darse cuenta de que la baja

de esos precios a nivel mundial no es la causa de la crisis internacional, sino sólo su exponente, el indicador de que esa crisis existe y que la baja de los precios del petróleo es sólo su consecuencia más visible. No se quiso admitir en ese tiempo —ni se admite todavía— que había una crisis general en todo el sistema capitalista, tal vez porque ésta no se había producido por el desplome estruendoso de la economía de un país determinado, como en 1929, sino por una lenta, pero irreversible, contracción del comercio entre los mismos países industrializados y de todos ellos con el resto del mundo. Cuando la crisis mundial se hizo presente en México con la baja de los precios del petróleo, el gobierno calificó a la nueva situación de pasajera, cuyos efectos perniciosos se compensarían en el momento en que los precios del petróleo recuperaran sus valores anteriores. El gobierno no se da cuenta, como no se da cuenta ahora, de que los precios del petróleo no volverán a elevarse en el mercado en la cuantía que alcanzaron en 1981 mientras subsista el estado de crisis general.

El programa de *reordenación económica* que puso en práctica este gobierno para enfrentar la crisis se expresa en dos líneas operativas: la primera es restringir el gasto público suprimiendo inversiones que el mismo gobierno considera innecesarias y eliminar subsidios y empleos que considera igualmente innecesarios. La segunda es alentar por todos los medios las exportaciones no petroleras para obtener divisas que compensen en parte la pérdida de los ingresos provenientes de la venta del petróleo.

La supresión de la inversión pública de gran escala tuvo, al principio, el carácter de una medida dilatoria, en espera de una reacción positiva de los precios del petróleo. Sin embargo, en la medida en que estos precios continuaron a la baja en el mercado internacional, la supresión de la inversión pública dejó de ser una medida dilatoria para convertirse en necesaria en tanto que ya

no hubo fondos para alimentarla. La supresión de la obra pública federal, que es la única de gran escala, es tolerable sólo como medida reguladora del presupuesto, pero más allá del límite empieza a afectar, y después afecta gravemente, a toda la actividad industrial, del orden público y privado, relacionada con los requerimientos materiales de esa obra. Como es lógico, tal política oficial contribuyó a ahondar la crisis por el aumento general del desempleo, a disminuir el nivel de la producción industrial y a lesionar seriamente el mercado de consumo. En breve tiempo quedó ociosa más de un tercio de la capacidad industrial del país y perdieron sus empleos más de dos millones de trabajadores. El decaimiento del potencial productivo de la nación se reflejó en el ingreso fiscal del gobierno y, por supuesto, esto le condujo, al gobierno, a poner en práctica el plan de *realismo económico* consistente en suprimir controles de precios y subsidios, con lo cual acabó de hundir al país en el más completo desorden económico.

Porque en un país, como el nuestro, donde los controles y subsidios formaban parte de la estructura productiva y de mercado de la economía nacional no eran, claro está, ni causa ni factores de la crisis. Suprimir esos controles y subsidios no ha producido, desde el punto de vista técnico, otro efecto que el de transferir recursos de los consumidores sin que por ello se haya modificado el volumen global de la producción, como era la pretensión del gobierno, ni mejorado en nada la economía.

La realidad ha demostrado que la elevación de precios, **estimulada por la supresión del control de precios y de subsidios**, ha ocasionado únicamente la reducción de la producción, en tanto que la elevación de precios no proviene del aumento de la demanda, sino de autorizaciones gratuitas otorgadas por el gobierno.

Los subsidios, por supuesto, deben desaparecer; pero desaparecer en una economía en expansión, donde el aumento del empleo y del ingreso permita absorber sin brusquedades el daño que produce en la demanda la supresión de los subsidios.

En una economía donde el mercado de consumo está agotado, la eliminación de controles y subsidios es algo peor que una equivocación, es una pura estupidez.

Y en cuanto al hecho de poner todas las esperanzas de la recuperación en las exportaciones no petroleras no deja de ser una candorosa ilusión, puesto que los países a donde se pretende llevar esas exportaciones están, ellos mismos, en crisis, protegiendo su mercado interior y, lo que menos desean, son importaciones porque están luchando por dar salida a sus propios inventarios acumulados. Prueba de esto es que el GATT ha sido impuesto a México por la fuerza.

Tres años de *reordenación económica* y de *realismo económico* fueron suficientes para desordenar y convertir en caos lo que el país venía ordenando desde Plutarco Elías Calles hasta López Portillo. La obra pública con inversión netamente mexicana, en contraposición a la realizada durante el porfiriato, se inició con Calles. Considerada en sí misma, la obra pública tiene una importancia excepcional.

A partir de Cárdenas, fueron eliminándose taponés al desarrollo que consistían en el dominio que detentaban los extranjeros sobre los recursos básicos del país; a partir de ahí, estos recursos se convirtieron en el demiurgo del progreso general del país. La nación creció tan impetuosamente, sobre todo desde la terminación de la segunda guerra mundial que pronto se habló en el exterior del *milagro mexicano*. El peso alcanzó la categoría de moneda dura en las operaciones del Banco Mundial.

Ahora la nación está en la miseria. El treinta y seis por ciento de la industria no funciona; hay más de dos millones de desempleados; hay una intensa descapitalización por la fuga de capitales al exterior; las finanzas públicas están en bancarrota; la moneda devaluada; el mercado de consumo abierto al GATT y en oferta a las maquiladoras; las empresas nacionales (nacionales, *paraestatales* es una tontería) en quiebra unas y en venta otras y...etc., etc.

No hay alternativa. La única salida de la situación en que se encuentra México está, si aún es tiempo, en que el gobierno adquiera conciencia de que es un error irreparable suponer que esta situación se resuelve con nuevos préstamos extranjeros o regalando nuestro mercado nacional al capital extranjero cuya sola presencia en México es un certificado fehaciente del fracaso económico de la nación; que menos vamos a salir de la crisis desmantelando o vendiendo la industria fundamental del país, la industria nacionalizada que constituye, aún ahora, aunque aporreada por las inepticias de la política oficial, la única agarradera sólida que queda al país para mantenerse independiente y a flote. En fin, que el gobierno deje de no hacer nada y reemprenda los grandes programas de desarrollo nacional, con apoyo de la industria nacionalizada, programas que requieren inteligencia, audacia y vocación política para concebirlos y realizarlos, como Alemán concibió el desarrollo de la cuenca del Papaloapan, Ruiz Cortines el actual emporio agrícola de Sonora y Sinaloa y López Mateos el de la cuenca del Grijalva y de la Chontalpa. Que el gobierno entienda que las empresas nacionales que están bajo su responsabilidad constituyen, en conjunto, aunque hasta ahora no se haya advertido, el *holding* más formidable del continente americano y que la función de un *holding* es, antes que otra cosa, integrar la operación de empresas enormes, industriales y financieras, en un plan común de desarrollo, en donde cada una de las unidades interrelaciona su producción y sus servicios en provecho y

beneficio del plan común. En Estados Unidos, y en Europa, el programa de un *holding* es el de lograr la mayor ganancia global mediante el dominio del mercado. Así operan los grandes mastodontes industriales europeos y norteamericanos. En México es distinto. Las poderosas empresas industriales, financieras y de servicios que están bajo el dominio directo del gobierno son empresas nacionales, propiedad de la nación, y su horizonte no es, por ello, la mayor ganancia del conjunto, porque sería un horizonte limitado. En México el conjunto de estas empresas, por su misma índole, debe buscar con su trabajo integrado, la mayor ganancia para la nación, y la mayor ganancia de la nación no se mide en pesos y centavos, sino en crecimiento económico general, desarrollo social y bienestar humano. En este contexto se desarrollaron y progresaron, aunque hasta ahora desarticuladamente, las empresas nacionales. Esto quiere decir que los recursos fundamentales de México, el petróleo, el gas, el carbón, la electricidad, el acero, los metales industriales, el transporte, los medios financieros, las comunicaciones y, además, el cemento, etc., etc., son los medios idóneos para el desarrollo nacional que esperan ahora, sin demora, su integración programática común, como verdadero *holding* al servicio de la nación. Sólo en esta función adquiere sentido el hecho de que estas empresas sean de propiedad nacional. El mercado para este *holding* lo abre el mismo gobierno con sus propios programas de desarrollo material y social del país.

De ahí que un gobierno que no entienda la función de la empresa nacionalizada y considere a ésta como entidad aislada, individual, independiente, como si fuese empresa privada en busca de un propio mercado particular, de su propio financiamiento y con administración burocrática absolutamente irresponsable, es un gobierno que condena de origen a esta empresa al fracaso, como es el caso de Fundidora y el inminente caso de Altos Hornos de México y de Siderúrgica Lázaro Cárdenas.

No fueron problemas propios de Fundidora los que causaron su quiebra, sino los problemas cada día más graves que plantea a la nación la política despreocupada, liberaloide, del actual gobierno, política aplicable en economías de principios de siglo, pero que resulta peligrosamente infantil –si es inocente– para manejar la formidable estructura *suigeneris* de la economía mexicana actual.

El Porvenir de Monterrey,
el 17 de junio de 1986)

Año costalares del movimiento obrero
en México (1935-1945)

Circó necesario, para entender mejor el grado de tensión en que se encontraban las dos corrientes ideológicas que se reunieron en 1935 para formar el Comité Nacional de Defensa Proletaria, trazar un breve estudio de las circunstancias internacionales y nacionales que rodearon este acontecimiento y explicar las dificultades que surgieron entre ambas corrientes en el proceso de integración de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Por la índole de este estudio, y por el hecho de que todos los pactados en el texto se basan en fuentes de primera mano o en documentos de tal naturaleza que no necesitan ser necesariamente citados y referenciados.

El ascenso del nazi-fascismo

La situación internacional en 1935, por lo tanto, fuertemente considerada, se había vuelto en extremo grave para la paz mundial. La Alemania nazi y el fascista habían logrado someter a su dominio a la mayoría de las naciones de Europa. Los dos grandes fascistas, el de Alemania y el de Italia, contaban con

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
MATERIA HISTORIA POLITICA

Años estelares del movimiento obrero en México (1935-1945)

Creo necesario, para entender mejor el grado de tensión en que se encontraban las dos corrientes ideológicas que se reunieron en 1935 para formar el Comité Nacional de Defensa Proletaria, trazar un breve esbozo de las circunstancias internacionales y nacionales que rodearon este acontecimiento y explican las dificultades suscitadas entre ambas corrientes en el proceso de formación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Por la índole de este simposio, y por el hecho de que todos los participantes en él tienen un conocimiento más o menos completo de tales circunstancias, este bosquejo es, necesariamente, esquemático y muy elemental.

El ascenso del nazi-fascismo

La situación internacional en 1935, política y militarmente considerada, se había vuelto en extremo peligrosa para la paz mundial. La Alemania nazi y la Italia fascista habían logrado someter a su dominio político a la mayoría de las naciones de Europa. Los dos grupos fascistas, el de Alemania y el de Italia, contaban con el

apoyo político y financiero de la alta burguesía europea, intimidada por el surgimiento de la Unión Soviética como nuevo Estado en el escenario internacional, Estado que, con su sola presencia, invalidaba los supuestos teóricos, políticos y sociológicos del sistema capitalista en su conjunto.

El proceso de conversión de la burguesía alemana al fascismo habíase iniciado desde el momento en que terminó la primera guerra mundial. Las pérdidas materiales y humanas de Alemania, con motivo de la guerra, más la imposición del Tratado de Paz que le imponía sanciones onerosas y arrebataba sus mercados coloniales, hicieron que en esa nación estallara el descontento popular en violentas manifestaciones de protesta no sólo contra los términos de ese tratado, sino contra la burguesía alemana que, por afán de rapiña, había desencadenado la guerra que al final había perdido. La reacción de la burguesía contra estas manifestaciones de clarísima tendencia revolucionaria fue brutal y despiadada. El 15 de enero de 1919, en medio de los tumultos populares, fueron asesinados Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht, los dos esclarecidos líderes del Grupo Espartaco dentro de la socialdemocracia alemana. Más tarde, en marzo de ese mismo año, ocurrió lo que la historia conoce como la *semana sangrienta* en Berlín, donde fueron masacrados miles de obreros alemanes y sus dirigentes y descabezado casi por completo el movimiento revolucionario del país. En esas monstruosas represiones participaron quienes, un poco después, formarían el pie veterano del partido nazi de Adolfo Hitler. El movimiento de la burguesía alemana hacia el fascismo, libre de oposición política, emprendió su intensa labor de propaganda para la organización del partido nazi. El contenido de esta propaganda, furiosamente anticomunista y antijudía, muy pronto conquistó el apoyo de la burguesía europea, trascendió las fronteras de Europa y obtuvo el respaldo político, y aun económico, de la burguesía internacional. Alemania fue nazificada por completo. En

1933, en las elecciones para designar nuevos diputados al Reichstag, los nazis, jefaturados por Hitler, obtuvieron 92 por ciento de los sufragios. En agosto de 1934, Hitler fue nombrado canciller y presidente del Tercer Reich.

En Italia había ocurrido un fenómeno semejante. Mussolini tomó el poder en 1922 y, a partir de ahí, emprendió una bárbara represión no sólo contra los dirigentes del movimiento obrero de ese país, sino contra toda persona que no profesara los fines políticos del partido fascista que encabezaba. Toda Italia quedó militarizada. El régimen de corporaciones que instituyó como forma de Estado italiano otorgó todo el poder de decisión en materia económica a las grandes empresas industriales y financieras, al tiempo que los obreros quedaron subordinados por dos vías al gobierno fascista: de un lado, por su adscripción forzosa al partido y, de otro, por su obediencia forzosa a las decisiones de los altos mandos sindicales que, a su vez, obedecían los mandatos del Consejo de las corporaciones.

En 1934 la amenaza fascista a la paz mundial era evidente y clara. En febrero de ese año se firmó el llamado Pacto Balcánico entre Grecia, Rumanía, Turquía y Yugoslavia, de obvia inspiración fascista. En marzo, el Japón proclama el imperio del Manchoukuo en el territorio de la Manchuria arrebatado militarmente a China. El mismo mes de marzo, se instalan las dictaduras fascistas en Estonia y en Letonia. En mayo, ocurre el golpe militar fascista en Bulgaria. En junio, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Von Papen, pronuncia un discurso que se difunde mundialmente llamando a la destrucción de la Unión Soviética. En diciembre, asesinato misterioso de Kírov, líder soviético, en Leningrado, que da lugar a la purga de agentes troskistas antisoviéticos en la URSS. También en diciembre, incidente italo-etíope, provocado por los fascistas italianos, que da lugar a la invasión de Etiopía por el ejército de Mussolini. Además, en enero de ese año, se expide la ley declarando